

Institución acordó pagar mediante cuadros que nunca entregó: Oposición acusa "trato privilegiado" con fundación Allende por millonaria deuda con el Serviu

El exministro Monckeberg menciona que más allá de lo peculiar de la forma de pago, "cuesta entender" que el Serviu se involucrara en "una solución a todas luces rara, que escapa de sus objetivos".

MARIANNE MATHIEU

Desde 2004, la Fundación Salvador Allende comenzó a acumular una deuda con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) por la adquisición del Palacio Heiremans, ubicado en la avenida República 475, donde actualmente se mantiene la fundación.

Por ello, se realizaron los años siguientes diferentes cambios en la fórmula de pago, lo que no evitó que la deuda siguiera por años, ascendiendo a más de \$566 millones.

Así, en 2015 la fundación manifestó la intención de pagar la deuda con cuadros (93 obras) tasados por la misma entidad en cerca de 830 mil dólares.

El problema, más allá de lo que implica el cambio, es que a ocho años de dicho acuerdo dichas pinturas aún no están en manos del Serviu.

Denuncia previa en Contraloría

Para algunos la historia es vieja. En 2018, ya habían solicitado a Contraloría los entonces diputados Diego Paulsen (RN), Gonzalo Fuenzalida (RN) y el exdiputado Cristián Monckeberg, investigar las "eventuales irregularidades" en la transferencia del inmueble y que "determine las responsabilidades administrativas que de aquello deriven".

Sin embargo, el entonces contralor, Jorge Bermúdez, desestimó la causa, porque la falta (de Hacienda) prescribió.

Se menciona en el documento de Contraloría que "si bien no se observó lo preceptuado en el artículo 14" del decreto ley N° 1.056, de 1975, ya que no consta que el ministro de Hacienda haya autorizado la misma en los términos que ahí se indican, lo cierto es

que atendido el tiempo transcurrido, el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 158 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, para hacer efectiva la eventual responsabilidad administrativa, se encuentra vencido".

"Este caso lo investigamos en 2018 porque desde entonces nos parecía escandaloso que se intentara saldar una deuda de más de 500 millones de pesos con un trueque de obras de arte, sin licitación, sin decreto y sin ninguna transparencia. Lo más grave es que ahora sabemos que esas obras ni siquiera han sido entregadas. No es solo una falta administrativa: es un abuso con los recursos de todos los chilenos", explica Paulsen, ahora jefe de campaña de Evelyn Matthei.

Por su parte, Monckeberg, además exministro de Vivienda, dice que "más allá de la prescripción que señaló la Contraloría, cuesta entender cómo el Minvu de la época involucró al Serviu en una solución a todas luces rara

que escapa de sus objetivos. La única explicación posible: privilegiar a la fundación Allende. Serviu entrega soluciones habitacionales, construye ciudad, pero no compra cuadros".

Desde la bancada de diputados RN, Andrés Longton y Paula Labra declaran que solicitarán a Matthei, en un eventual gobierno, recuperar las obras o "dejar sin efecto mediante la nulidad de derecho público" el contrato, dice el congresista.

"Regularmente, la familia Allende tiene un tratamiento bastante excepcional y privilegiado para hacer tratos con el Estado, no cumpliendo requisitos legales y aprovechando la especial cercanía política que ha tenido con gobiernos de izquierda en una suerte de complacencia evidente por parte de autoridades que tienen que resguardar el patrimonio fiscal", dice Longton.

Así también, Labra menciona que se citará a la comisión a las autoridades respectivas de Cultura para aclarar los traspasos.



En 2004, la fundación Salvador Allende comenzó a acumular una deuda con el Serviu por el traspaso del inmueble donde está ubicada, la cual a 2015 ascendía a \$566 millones.

"Apellido como franquicia"

El caso genera gran indignación en la esfera política por las peculiaridades que lo rodean. La diputada Chiara Barchiesi (P. Republicano) que solicitó iniciar una investigación al Consejo de Defensa del Estado, dijo: "La fallida compra de la casa de Salvador Allende no fue una excepción, resulta que la familia Allende usa su apellido como franquicia política para obtener recursos públicos".

El diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), apunta a que "cualquier chileno o institución del Estado quisiera tener este nivel de privilegio para poder pagar una deuda con el Estado, en

este caso particularmente con el Serviu. Nosotros creemos que es fundamental que se revisen este tipo de transacciones y evitar cualquier tipo de privilegio".

Así también el diputado de la DC y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, dice: "¿Tanto cuesta que traten a todas las instituciones, a las personas naturales y jurídicas con la misma vara? ¿Tanto cuesta pedirle a la Fundación Salvador Allende que pague sus deudas si las tiene? (...). Esto debe aclararlo el Serviu, esto tiene que aclararlo el Ministerio de Vivienda".

Y el diputado de la UDI, Gustavo Benavente, dice: "Tanto la Fundación Salvador Allende como la familia Allende han tenido un trato privilegiado en Chile".

“Lo más grave es que ahora sabemos que esas obras ni siquiera han sido entregadas. No es solo una falta administrativa: es un abuso con los recursos de todos los chilenos”.

DIEGO PAULSEN
JEFE DE CAMPAÑA DE EVELYN MATTHEI

“Tanto la Fundación Salvador Allende como la familia Allende han tenido un trato privilegiado en Chile”.

GUSTAVO BENAVENTE
DIPUTADO UDI

“Cuesta entender cómo el Minvu de la época involucró al Serviu en una solución a todas luces rara que escapa de sus objetivos. La única explicación posible: privilegiar a la fundación Allende”.

CRISTIÁN MONCKEBERG
EXMINISTRO DE VIVIENDA

“¿Tanto cuesta pedirle a la Fundación Salvador Allende que pague sus deudas si las tiene? (...). Esto debe aclararlo el Serviu, esto tiene que aclararlo el Ministerio de Vivienda”.

ERIC AEDO
DIPUTADO DC

“Regularmente, la familia Allende tiene un tratamiento bastante excepcional y privilegiado para hacer tratos con el Estado”.

ANDRÉS LONGTON
DIPUTADO RN

“Cualquier chileno o cualquier institución quisiera tener este nivel de privilegio para poder pagar una deuda con el Estado”.

MIGUEL ÁNGEL CALISTO
DIPUTADO DE DEMÓCRATAS